

8ª SESION ORDINARIA DEL 23 DE MAYO DE 1884

Presidencia del Dr. Ruiz de los Llanos

SUMARIO—*Asuntos entrados*—Aprobacion sobre tablas de un proyecto del Poder Ejecutivo acordando jubileado al Dr. D. Juan B. Alberdi—Por indicacion del Sr. Palacio se resuelve pedir al Poder Ejecutivo los estudios practicados para la construccion de un puente sobre el río Dulce en la provincia de Santiago del Estero—Consideracion del dictámen de la Comision de Culto e Instruccion Pública en el proyecto de ley, en revision, sobre estatutos de las universidades nacionales—Asuntos entrados.

PRESENTES.

Presidente
Albarracin (B.)
Araoz
Arauz
Arigós
Balsa
Barra
Beltran
Bustos
Cáceres
Calvo
Cano
Cárcano
Castro
Coquet
Corvalan
Crespo
Darquier
Dávila
De la Fuente
Demaria
Febre
Fernandez
Figueroa (F. C.)
Figueroa (F. J.)
Funes
Gallo (D.)
Gallo (P. S.)
Gil
Gilbert
Gorostiaga
Gomez (E.)
Gomez (F. M.)
Herrera
Leguizamon (L.)
Malbran
Navarro Viola
Ocampo
Olmedo
Palacio
Paz (E. N.)
Peña
Perez
Puebla

— En Buenos Aires, á veinte y tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, reunidos en su Sala de sesiones los señores diputados al márjen inscriptos, el señor Presidente declara abierta la sesion.

ACTA

— Se lee y es aprobada sin observacion la de la sesion anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

El Poder Ejecutivo de la Nacion Argentina.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1884.

Al Honorable Congreso de la Nacion.

Por comunicaciones recibidas del Ministro Plenipotenciario de la República en Francia, ha sido informado el Poder Ejecutivo de que el Sr. Dr. D. Juan Bautista Alberdi, actual Comisario General de Inmigracion en Paris, no puede, por el mal estado de su salud, consagrarse á los grandes trabajos que demanda el desempeño de su comision, habiéndola renunciado por esa causa.

El Dr. Alberdi pisa los últimos escalones de la vida, y se halla enfermo, inválido para el trabajo activo y en condiciones precarias de subsistencia, despues de haber dado á su pais, durante cincuenta años, la sávia de su fecundo talento.

No serán consignados en este mensaje los titulos del Dr. Alberdi á la consideracion de su patria: basta solo recordar que no hay página de nuestras instituciones que no lleve el sello de su inteligencia ó recuerde su nombre.

Los pueblos suelen desconocer los servicios de sus ciudadanos, pero tales hechos son siempre recordados por to-

Posse (F.)

Pujol Vedoya
Quintana
Roca
Rodriguez
Romero
Solá
Solveyra
Sosa
Tagle
Teran
Vega
Vidal
Villamayor
Videla
Yofre
Iramain
Zavalía

CON LICENCIA

Alvear
Ortiz
Posse (E.)
Solari
Solier

CON AVISO

Acosta
Albarracin (J. P.)
Argento
Araujo
Benitez
Civit
Güemes
Lainez
Lahitte
Leguizamon (O.)
Paz (M.)
Serú
Zavalla

SIN AVISO

Costa
Dantas
Diaz
Enciso

das las generaciones con merecido reproche.

La República Argentina no debe imitar esos ejemplos, y ya que felizmente se halla en condiciones de manifestar su gratitud hácia sus buenos servidores, no es justo que desatienda á uno de sus eminentes constitucionalistas, quien, por sus méritos y por la edad avanzada en que se encuentra, merece las consideraciones del Gobierno de su patria.

En consecuencia, pido al Honorable Congreso de la Nacion, se digne prestar su apoyo al adjunto proyecto de ley.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

EDUARDO WILDE.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º Acuérdase al Dr. D. Juan B. Alberdi, en premio de los servicios prestados á la Nacion, la pension vitalicia de cuatrocientos pesos mensuales.

Art. 2º Esta suma será imputada á la presente ley.

Art. 3º Comuníquese al P. E.

E. WILDE.

DESPACHO DE LAS COMISIONES

— La Comision de Guerra se ha espedido en las solicitudes de doña Tránsito Araoz de Lamadrid, de doña Ercilia Suarez de Arizábalá y de las señoritas Dolores y Antonia Rodriguez. (A la órden del día.)

PETICIONES PARTICULARES

— Doña Margarita Rojo de Echeverría, pensionista militar, solicita aumento de pension. (A la Comision de Guerra.)

Sr. Presidente—No hay mas asuntos en-
trados.

Pasaremos á la órden del dia.

PENSION AL DOCTOR ALBERDI

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Señor Presidente: Acaba de leerse la sentida nota del Poder Ejecutivo de la Nacion promoviendo la pension vitalicia para el doctor don Juan-Bautista Alberdi, ilustre argentino que ha consagrado toda su vida al servicio del país y que, puede decirse, es el evangelista de nuestra Constitucion, porque ha sido el espositor mas notable de ella.

Creo, señor Presidente, que la Cámara se pondría á la altura de la nota del Poder Ejecutivo y corresponderia dignamente á los servicios prestados por este benemérito argentino, haciendo una escepcion al procedimiento que estos proyectos tienen para su tramitacion, tomando en consideracion sobre tablas el que ha remitido el Poder Ejecutivo.

Hago, pues, mocion en este sentido.

—Suficientemente apoyada esta mocion, se vota y es aprobada.

— Se aprueba sin observacion el proyecto en general.

— El artículo 1º se aprueba igualmente sin observacion.

— En discusion el artículo 2º.

Sr. Gallo (D.)—Pediria que se agregára: hasta tanto sea incorporada á la ley de presupuesto.

Es con el objeto de cumplir el precepto de la ley de contabilidad.

Sr. Presidente—No sé si tiene apoyo esta indicacion....

— Apoyado.

Se votará, entonces, el artículo con la indicacion propuesta, dado el apoyo notable que ella ha tenido.

— Se vota y se aprueba.

— El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente—Queda sancionado el proyecto.

PUENTE SOBRE EL RIO DULCE

Sr. Palacio—Pido la palabra.

Antes de pasar á la órden del dia, deseo hacer una indicacion.

Por ley del Honorable Congreso, del año próximo pasado, se mandó practicar estudios para la construccion de un puente sobre el rio Dulce, frente á la ciudad de Santiago.

Me consta que hace lo menos cinco meses que esos estudios se practicaron, y hago indicacion para que la Cámara autorice al señor Presidente á pasar una nota al Poder Ejecutivo,

á fin de que remita esos estudios á la brevedad posible.

— Apoyado.

— Se vota la mocion del señor diputado por Santiago, y es aprobada.

ORDEN DEL DIA

ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Comision de Culto é Instruccion Pública.

A la H. Cámara de Diputados.

Vuestra Comision de Culto é Instruccion Pública ha estudiado el proyecto de ley pasado en revision por el H. Senado, disponiendo que los consejos superiores de las universidades de Buenos Aires y Córdoba dicten sus respectivos estatutos; y por las razones que espondrá el miembro informante, tiene el honor de aconsejarlos su sancion, con la modificacion siguiente en el inciso 6º del art. 1º:

« Las cátedras vacantes serán llenadas en la forma siguiente: la facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo Superior, y si esto la aprobare, será elevada al Poder Ejecutivo, quien designará de ella el profesor que deba ocupar la cátedra. »

Sala de la Comision, Mayo 17 de 1884.

D. E. Palacio — M. Demaria — O.

Leguizamon — A. F. Crespo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º — El P. E. ordenará que los consejos superiores de las Universidades de Córdoba y Buenos Aires, dicten sus estatutos en cada una de estas universidades, subordinándose á las reglas siguientes:

1ª La Universidad se compondrá de un Rector, elegido por la Asamblea Universitaria, el cual durará cuatro años, pudiendo ser reelecto — de un Consejo Superior y de las facultades que actualmente funcionan, ó que fuesen creadas por leyes posteriores. La Asamblea Universitaria es formada por los miembros de todas las facultades.

2ª El Rector es el Representante de la Universidad — preside en las sesiones de la Asamblea y del Consejo, ejecuta sus resoluciones y ejerce la jurisdiccion universitaria en todos sus establecimientos, cuando se hallare presente.

3ª El Consejo Superior se compone del Rector, de los decanos de las facultades y de dos ó mas delegados que estas nombren. Resuelve en última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado las facultades — fija los derechos universitarios con la aprobacion del Ministerio de Instruccion Pública — formula el proyecto de presupuesto para la Universidad — y dicta los reglamentos que sean convenientes y necesarios para el régimen comun de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios.

4ª Cada facultad ejecutará la jurisdiccion policial y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos —

aprobará ó reformará los programas de estudios presentados por los profesores, dispondrá de los fondos universitarios que le hayan sido designados para sus gastos, rindiendo una cuenta anual al Consejo Superior — y fijará las condiciones de admisibilidad para los estudiantes que ingresen en sus aulas.

5ª En la composicion de las facultades entrarán cuando menos una tercera parte de los profesores que dirijen sus aulas, correspondiendo al Poder Ejecutivo y á la facultad respectiva el nombramiento, por mitad, de todos los miembros titulares.

6ª Las cátedras serán provistas en concurso de oposicion, el cual se repetirá de ocho en ocho años. Serán admitidos como profesores libres los que lo soliciten, debiendo rendir ante las facultades una informacion de *vita et moribus*.

7ª Los derechos universitarios que se perciban, constituirán el « fondo universitario », con escepcion de la parte que el Consejo Superior asigne, con la aprobacion del ministerio, para sus gastos y para las facultades.

Cada cuatro años se dará cuenta al Congreso de la existencia de estos fondos.

Art. 2º Los estatutos dictados por los consejos superiores, con arreglo á las bases anteriores, serán sometidos á la aprobacion del Poder Ejecutivo.

Art. 3º Comuníquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Buenos Aires, Junio 23 de 1883.

FRANCISCO B. MADERO.

B. Ocampo,
Secretario.

Sr. Presidente.—Está en discusion en general.

Sr. Demaria.—Pido la palabra.

La Comision que se ocupa del estudio de los asuntos que se refieren á instruccion pública, ha encontrado en su cartera tres proyectos referentes á las universidades de Córdoba y Buenos Aires. Dos de ellos, son proyectos de estatutos para cada una de esas universidades, remitidos al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El que se refiere á la universidad de Córdoba, fué formulado por la misma universidad y pasado al Poder Ejecutivo, quien lo remitió al Congreso con algunas modificaciones.

El que se refiere á la universidad de Buenos Aires, fué mandado redactar, por el Poder Ejecutivo, á cuatro distinguidos profesores, dos abogados y dos médicos, y remitido tambien al Congreso.

Largo tiempo han estado esos proyectos en la carpeta de la Comision, sin haber sido despachados.

El año pasado, el señor senador por Tucuman, doctor Avellaneda, presentó al H. Senado el proyecto que ha despachado la Comision,

y que el señor Presidente acaba de poner en discusion.

La Comision se resolvió, señor Presidente, á despachar este proyecto, en consideracion á que habria sido muy difícil á la Cámara el estudio de los estatutos de ambas universidades, que por ser muy largos y reglamentarios, exigirían de parte de la misma Cámara una preparacion especial en esta materia y un trabajo que la hubiera demorado muchísimo. Crea, pues, que era mas conveniente presentar estas bases generales, para que despues, cada una de las universidades, con la competencia que dá la práctica y la dedicacion á estos estudios, pudiera formar sus respectivos reglamentos.

Por otra parte, habría, tal vez, inconveniente en que el Congreso dictara los estatutos de esas universidades, porque, teniendo que contener ellos una gran parte propiamente reglamentaria seria muy posible que, una vez en vijencia esos reglamentos, la práctica mostrara deficiencias en esa parte reglamentaria que obstaculizasen el mejor desarrollo de la instruccion universitaria, inconveniente que no podría salvarse sinó por otra ley, que, es muy posible, no se dictaría sinó despues de mucho tiempo.

Son estas las razones que han inducido á la Comision á dar preferencia al proyecto sancionado el año anterior por el Senado.

Como acaba de verlo la Cámara, este proyecto es muy corto, y solo detendré su atencion para hacerle notar aquellos puntos mas notables.

Es sabido, señor Presidente, que las universidades, en todas partes, han tenido siempre una gran influencia en la sociedad, influencia, no solo política, sinó tambien religiosa, debida, principalmente, á la independencia y autonomia de que han gozado siempre.

Hubiera sido de desear que entre nosotros se hubiese podido tambien sancionar una ley que diera esa completa independencia de todos los demás poderes á nuestras universidades; y hubiera sido conveniente, señor Presidente, porque es indudable que, como decia el señor miembro informante de la Comision en el Senado, cuando se sancionó allí este proyecto, la ciencia debe ser enseñada por la ciencia misma, sin recibir obstáculos de poderes extraños, que muchas veces pueden tener en vista objetivos que no sean el adelanto de ella.

Pero es necesario tambien, señor Presidente, que la Cámara se fije en que las universidades de la República no se encuentran en las mismas condiciones de esas otras universidades que ya han gozado de esa autonomia é independencia. Las universidades argentinas no tienen los recursos propios necesarios para caracterizar y garantizar esa independencia, y tienen que vivir, hasta que no los posean, á

expensas del Tesoro Público. Esto hace, pues, que sea necesario dar alguna intervencion á los poderes públicos del país.

La Comision se ha permitido introducir una modificacion en el proyecto sancionado en el Senado, y está es, que en vez de proveerse las vacantes, como se habia sancionado, por concurso público, sean llenadas por medio de ternas que las respectivas facultades deberán pasar al Consejo, debiendo el Consejo, á su vez, pasarlas, previa su aprobacion, al Poder Ejecutivo.

Ha influido, señor Presidente, en el ánimo de la Comision, para aconsejar esta reforma, en primer lugar, la opinion del mismo autor del proyecto, doctor Avellaneda, que el año anterior, cuando ya la Comision de Instruccion Pública estudiaba este asunto, dijo que él no resistia ya á las ideas sostenidas por el señor Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública, en oposicion á la forma que el autor del proyecto habia propuesto, relativamente á la manera de llenar las vacantes. En segundo lugar, ha influido en el ánimo de la Comision la opinion del mismo señor Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública, estando ella, por su parte, convencida de que, si bien es cierto que en teoria lo mas conveniente es que las vacantes se provean por medio de concurso, la práctica ha demostrado que no se obtienen siempre los mejores profesores por tal sistema.

La Comision ha tratado de tomar todas las garantias necesarias para que no se nombre profesores por favoritismo. En este sentido, como habran visto los señores diputados, ha hecho intervenir á tres diversas entidades en la designacion de los catedráticos. Así, es la Facultad misma en la cual existe la vacante, quien forma la terna y la pasa al Consejo Superior. Es el Consejo Superior quien, si encuentra que las personas propuestas por la Facultad respectiva son aceptables, eleva la terna al Poder Ejecutivo, reservándose el derecho de devolver á la misma Facultad dicha terna, si no encuentra en alguna de las personas designadas las condiciones requeridas para el puesto. Es, por último, el Poder Ejecutivo quien hace la designacion.

Hay, por consiguiente, una triple garantia: la eleccion hecha por la Facultad, la aprobacion de esta eleccion que debe hacer el Consejo, y, por último, la aceptacion hecha por el Poder Ejecutivo.

Encuentra la Comision, Sr. Presidente, que por este medio no hay que temer que se hagan nombramientos por favoritismo.

No desconoce la Comision tampoco las muy buenas razones que puede alegarse en favor del concurso, y que, por cierto, no me detendré á esponer á la Cámara; pero, como

he dicho anteriormente, la práctica ha demostrado que el sistema que ella propone es el mas conveniente, y, no solo la práctica de nuestras universidades, sino tambien la de las demas naciones.

Acabo de ver que en Alemania, Austria, Países Bajos y en Holanda se llenan las vacantes en la forma que propone la Comision, naciones todas en las cuales habia existido anteriormente el concurso.

Me parece, señor Presidente, que la simple lectura del despacho dá una explicacion de cada una de sus disposiciones, y que no merece que yo detenga la atencion de la Cámara esponiéndolas particularmente.

Si alguno de los señores diputados deseara oír mayores explicaciones sobre los artículos del proyecto, me complaceré en dárselas.

Sr. Castro—Pido la palabra.

Deseo saber del miembro informante si una vez que estos estatutos hayan sido redactados por los consejos ó facultades y obtenido del Poder Ejecutivo la aprobacion, pasan á ser ley.

Sr. Demaria—Los estatutos no pueden ser ley; los estatutos son estatutos una vez que hayan sido aprobados por el Poder Ejecutivo, estando de conformidad con la ley, para eso que se dispone que pasen al Poder Ejecutivo.

Pero los estatutos no serán ley; serán el reglamento de las universidades.

Sr. Castro—Entonces se espera que el Congreso dicte una ley al respecto. Esto no es sino provisorio.

Sr. Demaria—Me parece haber dicho, señor diputado, que lo que la Comision presentaba á la Cámara, y que así lo habia entendido el mismo autor del proyecto, segun lo habia manifestado al proponerlo al Senado, eran bases sobre las cuales deberia fundarse el reglamento que dictará cada una de las universidades. Es decir, en este proyecto se contiene lo esencial de los estatutos, y, debido á las razones que antes manifesté, que no es posible á la Cámara entrar á discutir la parte reglamentaria, es que el proyecto deja á cada una de las universidades el que dicten sus reglamentos, de conformidad en todo á las bases que se dictaren por el Congreso.

Sr. Castro—Bien, señor Presidente; yo comprendo que esta reglamentacion importa una ley, por mas que el miembro informante diga lo contrario; porque va á derogar una ley existente, del año 58, que reglamenta esto; ley que es la misma que tratamos ahora de derogar, y que está vigente; y, en ese caso, me he de oponer al proyecto, no porque no crea que sea una necesidad urgente y vital, sino porque el Congreso vá á eximirse de una prerrogativa que la Constitucion le dá: reglamentar la instruccion superior.

Nosotros, aquí, vamos á delegar esta facultad en una comision, llámese consejo, llámase facultad y yo no puedo, como legislador, asentir á esa delegacion.

Ahora, si estos estatutos, despues que sean redactados por esas comisiones, hubieran de venir al Congreso para ser discutidos y aprobados, yo prestaria mi voto, con muy buena voluntad, al proyecto. Pero, si ellos han de quedar como una ley permanente;—y digo ley porque para ellos vá á ser ley á la cual tendrán que ajustarse—entonces yo votaré en contra; porque, como he dicho antes, salvando la competencia, que respeto, de esas facultades, no puedo delegar la facultad que tengo como legislador, por el temor de que es mucho lo que hay que estudiar, ó que es difícil. Quiero que esos estatutos vengan acá, que sigan las tramitaciones de los proyectos y que el Congreso diga:—Son buenos ó malos; hay estas ó aquellas reformas que hacer.

Así es que votaré en contra, fundado en estas ligeras observaciones.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

No me parece que sea razon bastante para que el Congreso no dicte esta ley, el que exista una anterior, la cual vá á ser derogada por esta.

Todas las leyes, el señor diputado lo sabe, son modificadas por leyes posteriores, de manera que la ley de 1858 quedaria derogada una vez sancionada esta.

Si bien es cierto que la Constitucion dá al Congreso la facultad de reglamentar la instruccion, me parece que se refiere principalmente á la instruccion primaria.

Sr. Castro—A la superior.

Sr. Gallo (D.)—A la universitaria tambien.

«Planes de instruccion general y universitaria», dice la Constitucion.

Sr. Demaria—Perfectamente, entonces no recordaba mal el artículo constitucional.

Me parece que la reglamentacion á que la Constitucion se refiere, no es aquella de que debe ocuparse el Congreso. La reglamentacion á que la Constitucion se refiere es esta, porque esta es el plan general á que debe ser sometida la instruccion superior; porque es ella la que le encarga la Constitucion al Congreso, y no precisamente como lo entiende el señor diputado, dar un reglamento acabado, minucioso de detalles, porque, como lo he dicho al principio, es muy posible que el Congreso, no tenga la competencia necesaria para hacerlo, ó que, aunque la tenga, diferentes circunstancias accidentales exijan el cambio de esos estatutos.

Así, por ejemplo, si el Congreso se ocupase de dictar esos estatutos, tendria que entrar hasta en los minuciosos deberes del portero,

de las funciones de los bedeles, de los bibliotecarios, á qué hora debe estar abierta y cerrada la puerta; en fin, de todas aquellas insignificancias, puedo decir así, que no merecen la atencion del Congreso y que si se trajeran á su discusion, es muy posible que se cometieran errores, que tendrian que subsistir hasta que la ley se reformara, que es muy posible tardara mucho tiempo sin que se consiguiera.

No ha sido, señor Presidente, el temor del trabajo, como lo he dicho antes, el que ha hecho que la Comision no se preocupe del estudio de los estatutos de las universidades; han sido estas razones, y el convencimiento de que seria sumamente difícil al Congreso, por mas deseos que tuviera, poder dictar los estatutos como debiera.

Me parece que cada uno de ellos contiene ciento cuarenta ó ciento cincuenta artículos, lo bastante para que, si se estudiaran con la detencion debida, demorara por lo menos dos meses de sesiones continuas de la Cámara.

Todos estos inconvenientes se evitan por el medio que propone la Comision, que es precisamente, como lo acabo de decir, lo que exige la Constitucion: dictar un plan general sobre el cual deba basarse la instruccion que se dé en las universidades.

He dicho.

Sr. Presidente—Se votará si se aprueba ó nó en general el proyecto en discusion.

— Se aprueba.

Sr. Presidente—Si la Cámara no tuviera inconveniente, la discusion en particular podria hacerse base por base, pues equivale cada una á un artículo.

— Aceptada tacitamente esta indicacion, se pone en debate la base 1ª.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Desearia saber si el último inciso de la base primera, que dice: *La Asamblea Universitaria es formada por los miembros de todas las facultades*, incluye los delegados de que habla la base 3ª.

Sr. Navarro Viola—Delegados de las facultades, miembros natos de ellas...

Sr. Yofre—No dice que sean de las facultades.

Sr. Demaria—Si se fija, verá que son solamente para formar el Consejo Superior, y aquí se trata de las asambleas universitarias.

— El señor diputado Gallo (D.) hace una observacion en voz baja al señor diputado Yofre.

Sr. Yofre—Entonces agreguemos, en la base tercera, que los delegados sean del seno de las facultades.

De esa manera quedaria salvada la duda que hacia notar.

Otra pregunta deseaba hacer: ¿el Rector podrá ser electo de entre los miembros de las facultades, ó de los graduados de las universidades, ó de personas completamente extrañas á estas?

Sr. Demaria—Cuando el proyecto no establece limitacion ninguna, hay amplia libertad para nombrar á quien se quiera.

Sr. Yofre—De manera que se puede nombrar á cualquier persona, aunque no pertenezca al gremio universitario?

Sr. Demaria—Esa es la mente del artículo.

— Se aprueba la base en debate.

— En discusion la 2^a.

— Piden la palabra los señores diputados Navarro Viola y Castro.

Sr. Presidente—Creo que ha pedido primero la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Navarro Viola—La cedo al señor diputado por Catamarca.

Sr. Castro—Iba á hacer una simple pregunta; hablaré despues del señor diputado.

Sr. Navarro Viola—Comenzaré por hacer tambien una pregunta á la Comision, cuya respuesta creo que será útil á la Cámara, porque me parece difícil comprender la última parte del artículo: *y ejerce la jurisdiccion universitaria en todos sus establecimientos, cuando se hallare presente.*

Sr. Castro—Es lo mismo que iba á preguntar.

Sr. Demaria—Lo que entiendo por eso, es que cuando se encuentra presente el Rector, él ejerce todas las facultades que la ley y los reglamentos atribuyen al jefe superior.

Sr. Navarro Viola—Si por jurisdiccion se entiende lo que todos sabemos, esa jurisdiccion la acuerda la Comision, en la base 3^a. al Consejo Superior; en la 4^a. á la Facultad, en casos determinados. Aquí la acuerda, en tercer término, al Rector, en casos indeterminados.

Me parece que la Comision ha carecido de un dato, probablemente.

Yo creo que esta última parte responde solamente á un punto de etiqueta ó de ceremonial. Creo que el origen de la redaccion primitiva de este despacho fué un hecho que tuvo lugar con el Rector de la Universidad de Buenos Aires.

Sucedió que en una colacion de grados, presidida por el decano de la Facultad de Derecho, se presentó el Rector de la Universidad, que creía le correspondia el puesto de la presidencia. No creyéndolo así el Decano, continuó presidiendo y el Rector se

ausentó. Para evitar esta colision de facultades, al año siguiente el Decano de la Facultad de Derecho invitó voluntariamente al Rector á presidir la colacion de grados.

No sé los términos en que estaba primitivamente redactada esta base, pero probablemente responde á este antecedente: á fijar la situacion del Rector respecto á la presidencia de actos normalmente presididos por el Decano, cuando se trata de la Facultad, ó por el Presidente del Consejo, cuando de este se trata.

Si así es, creo que debiera espresarse netamente, y no fijar las atribuciones del Rector, y poner al final este ejercicio de jurisdiccion, que parece á primera vista, que importase una superintendencia, y hasta cierto punto lo dá á entender así la explicacion que hemos oído del señor miembro informante.

Asés que, cuando menos, yo pediria, si la Comision no acepta el retiro de la última parte, que se votara por partes, para dar mi voto en contra de esta última.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

He visto, señor Presidente, por lo que me ha manifestado el señor diputado, que habia comprendido bien el espíritu de la Comision al aceptar los términos en que viene el proyecto.

La Comision ha entendido que estas últimas palabras de la base 2^a: *ejerce la jurisdiccion universitaria en todos sus establecimientos, cuando se hallare presente*, no tienen otro alcance que el que las mismas palabras le dan; es decir, cuando se encuentra presente el Rector de una de las universidades, en una de las facultades, en uno de los consejos, él es el que tiene la presidencia, la direccion del Consejo, ó de la Facultad en que se encuentre.

Me parece, señor Presidente, que el señor diputado ha de convenir en que es conveniente establecerlo, porque es muy posible que, si la ley espresamente no lo dijera, las facultades negaran al Rector intervencion alguna en todo aquello que les fuera encomendado por la ley ó por sus reglamentos; y en que hay conveniencia en que sea el Rector el que presida, el que tome la iniciativa, siempre que sea necesario, en todo lo que se refiere á las mismas facultades y al Consejo Superior.

Estableciéndolo, como se hace en este proyecto, creo inútil decir espresamente que será el Rector el que tenga el asiento de preferencia en el caso de reunion del Consejo, como lo indicaba el señor diputado, puesto que habria contradiccion entre esta jurisdiccion del Rector y su colocacion inferior en dichos actos.

Sr. Navarro Viola—Pido la palabra.

Para contestar simplemente á dos aseveraciones del señor diputado.

Sr. Demaria — Si el señor diputado me permite...

Deseaba también hacerle notar que el proyecto no atribuye la jurisdicción á diferentes personas ó cuerpos, en estos distintos incisos.

Sr. Navarro Viola — El tercero se *la* atribuye al Consejo Superior, y el cuarto á las facultades.

Sr. Demaria — ¿En qué parte del inciso tercero se atribuye esa jurisdicción?

Sr. Navarro Viola — En todo él. Dice:

«El Consejo Superior se compone del Rector, de los decanos de las facultades y de dos ó mas delegados que estas nombren. Resuelve en última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado las facultades — fija los derechos universitarios con la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública — formula el proyecto de Presupuesto para la Universidad — y dicta los reglamentos que sean convenientes y necesarios para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios.»

Esto es, propiamente, ejercer jurisdicción, como es ejercer jurisdicción el principio del segundo inciso del artículo 1º, que atribuye al Rector la representación de la Universidad y la presidencia de las sesiones de la asamblea.

Sr. Demaria — Pero el señor diputado me parece que no se fija en que el inciso que discutimos en este instante todo lo que hace es dar al Rector la jurisdicción cuando se encuentra presente en uno de los consejos ó facultades. Esto no importa darle implícitamente la facultad de resolver todos los asuntos sometidos á esos consejos ó facultades, que es precisamente lo único que determina el inciso 3º.

En este inciso, se dá la facultad á los consejos superiores para resolver lo que no importa contradicción con dar la jurisdicción al Rector, cuando se encuentra presente en una de esas facultades ó consejos.

El inciso 4º, tampoco dá á otra persona esa jurisdicción, puesto que se refiere á una jurisdicción diferente, á la jurisdicción policial, como lo dice espresamente.

Me parece que, con esta esplicación, el señor diputado ha de convenir en que no hay contradicción alguna en los tres incisos, que establecen respectivamente: la jurisdicción del Rector mientras esté presente en cualquier cuerpo; la facultad de resolver dada á los consejos y facultades; y, por último, la jurisdicción policial, que es diferente á la que se dá al Rector en el inciso 2º.

Sr. Navarro Viola — Comenzaba diciendo que tenía que contestar dos aseveraciones.

La última que había hecho el señor diputado es que yo deseaba que se espresase como

indiqué: Yo no deseo que se espresase nada; deseo que se quite eso.

Para rendir una idea clara, decía que debería haberse espresado así. Pero me parece que basta el inciso que está en discusión, redactado en esta forma: «El Rector es el representante de la Universidad, preside las sesiones de la Asamblea y del Consejo, y ejecuta sus resoluciones.» Nada mas.

Y con tanta mayor razón insisto en la eliminación de este párrafo, cuanto que, en el mismo inciso, se dice, respecto del Rector, que preside las sesiones de la asamblea. Si se sabe, pues, espresar la idea de que preside la asamblea, ¿por qué, cuando se quiere exclusivamente hacerle presidir otra asamblea, no se emplea la misma palabra, y se nos viene con esta anfibia de que *ejerce la jurisdicción*?

No hay jurisdicción aquí.

Sobre todo, señor Presidente, si se quiere espresar que debe presidir las reuniones de las facultades, ó dígase sencillamente así, ó resérvese para lo reglamentario que, como lo ha dicho muy bien el miembro informante, al principio, no puede ponerse en estas bases generales, pues es materia casi técnica, que tienen que resolver las mismas facultades.

Entonces, pues que insiste el miembro informante en conservar ese inciso, uso del derecho que me dá el Reglamento, pidiendo que se vote por partes, para votar en contra de lo que he indicado.

Sr. Gallo (D.) — Pido la palabra.

Me parece que la observación que ha hecho el señor diputado por la Capital, es sumamente atendible; sin embargo de que me parece también que, siendo previsores, debemos salvar, para lo sucesivo, cualquier conflicto de la naturaleza del que el señor diputado ha indicado.

Por lo que ha dicho el señor miembro informante de la Comisión, creo que es necesario distinguir, en este caso, dos clases de facultades ó prerogativas que puede tener el Rector de la Universidad.

Serían de la primera, las prerogativas que pueden llamarse de honor, ó de preferencia.

Es indiscutible que el Rector de la Universidad, como la primera persona, como el representante del cuerpo universitario, debe tener preferencia en cualquier parte donde se encuentre, debe ocupar el asiento de honor, aun respecto de los mismos decanos de las facultades.

Pero hay también otras atribuciones que ya no son simples prerogativas, sino que son verdaderas facultades de jurisdicción, y es á este respecto que me parece muy atendible la observación del señor diputado por la Capital.

En los estatutos que estamos dictando, se

encuentran perfectamente determinadas las facultades del Consejo General y las atribuciones de las distintas facultades universitarias. El Consejo General dicta todos los reglamentos concernientes á estas facultades. Corresponde, en cambio, á estas, la jurisdiccion policial y disciplinaria, dentro de sus institutos respectivos, de acuerdo con los reglamentos que podrán dictarse.

Quiere decir que, por el inciso 4º, habremos entregado á cada Facultad Universitaria la jurisdiccion policial y disciplinaria de las distintas aulas que se encuentren encomendadas á sus cuidados.

En ejercicio de estas atribuciones, los decanos y las facultades mismas podrán tomar una resolucion cualquiera. Si pasara el artículo tal como lo propone la Comision, el Rector de la Universidad tendria perfecto derecho para dictar una resolucion completamente contraria á la del Decano ó de la Facultad. ¿Que resultaria, entonces? ¿Se aceptaria la resolucion del Rector ó la del Decano? ¿Se aceptaria una resolucion transitoria, para un caso especial y que solo tendria lugar cuando el Rector estuviese presente, ó se aceptaria las resoluciones generales que sirviesen de regla de conducta para las facultades de que se trata? Indudablemente lo que mas conviene, á fin de no perder la unidad que en esta clase de asuntos debe existir, es que predomine la resolucion del Decano ó de la Facultad.

Por otra parte, habria este otro grave inconveniente: ¿á donde iria á parar la autoridad moral del Decano de cada Facultad, si se atribuyese al Rector el derecho de rever sus resoluciones y de tomar en caso dado, otra completamente distinta?

Me parece, entonces, que es conveniente modificar el artículo, aceptando parte de lo que la Comision quiere, pero quitando la otra, que puede ser muy peligrosa en la práctica, y á este fin, propondria que dejáramos al Rector, como representante de la Universidad, el derecho de presidir las sesiones de la asamblea, el de ejecutar sus resoluciones y de presidir todos los actos universitarios en que se encuentre presente; pero dejando la jurisdiccion policial y disciplinaria á cargo esclusivo de las distintas facultades.

Me parece que así quedarian salvadas todas las dificultades.

Sr. Navarro Viola—Perfectamente.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

Debo aceptar la modificacion que proponen los señores diputados, porque, desde el momento que el proyecto, tal como está redactado, se presta á otra interpretacion de la que le dá la Comision, es conveniente reformar sus términos, de modo que no den lugar á dudas.

La Comision ha entendido por estas palabras, no lo que entiende el señor diputado Dr. Gallo. Al decir este proyecto que el Rector ejerce la jurisdiccion cuando se encuentre presente, no entiende darle facultad para modificar las disposiciones que hayan dictado las Facultades ó los Decanos.

Sr. Gallo (D.)—No digo eso, pero puede haber la dificultad en la interpretacion; puede el Rector interpretar esa cláusula de una manera distinta, y tendremos entonces una colision en que, cuando menos, habrá pérdida de autoridad para las respectivas facultades.

Sr. Demaria—Efectivamente, es posible ese caso, pero no se salva sinó en parte con la modificacion que propone el señor diputado, porque es posible que el mismo Rector le dé esa interpretacion á la resolucion de la Facultad, y aun cuando no se encuentre presente en la Facultad misma, exija el cumplimiento de esa resolucion en la forma que él la entienda y no en la forma que la entienda la Facultad.

Ya vé, pues, el señor diputado que no evita los conflictos por los medios que él propone.

Sr. Gallo (D.)—Me parece que sí.

Sr. Demaria—Pero como acabo de manifestar, señor Presidente, yo, por mi parte, no tengo inconveniente en aceptar los términos que el señor diputado propone, porque importa lo mismo que ha entendido la Comision.

Sr. Presidente—Manifestándose por la Comision que se acepta esta indicacion, se vá á dar lectura del artículo tal cual quedaria redactado.

Sr. Gallo (D.)—Voy á dictar.

«El Rector es el representante de la Universidad, preside las sesiones de la Asamblea y del Consejo, y ademas ejecuta aquellos actos en que estuviese presente.»

Sr. Navarro Viola—Tal vez podria quedar me'or así.

«El Rector es el representante de la Universidad, preside todos los actos universitarios en que se halle presente»...

Sr. Calvo—De otra manera no podria presidir.

Sr. Navarro Viola—...Las sesiones de la Asamblea y del Consejo, y ejecuta sus resoluciones.

En eso me parece que todos estamos conformes, menos el señor diputado por Capital.

Sr. Calvo—Yo señalo una dificultad que se me ocurre; tengo ideas completamente diversas; oigo con respeto y consideracion, y mis dudas las emito para ver si se pueden salvar.

El resultado de la corta discusion que ha tenido lugar, muestra que hay tanta ambigüedad en el proyecto del Senado, que la Comision apoya, como en la enmienda de los señores

res diputados, y que no tratamos de darle con precision y exactitud al Rector de la Universidad, las facultades, las atribuciones y la jurisdiccion que se le quiere señalar.

Yo, que he oido, como digo, con el mayor respeto las observaciones hechas, estoy inclinado á aceptar la redaccion de la Comision, la que, sin embargo, me parece que quedaria mas completa suprimiendo algunas palabras que enmendándola, porque haríamos talvez una enmienda peor que el soneto.

El artículo quedaria así: «El Rector es el representante de la Universidad, preside las sesiones de la Asamblea y del Consejo, ejecuta sus resoluciones y ejerce la jurisdiccion universitaria en todos sus establecimientos.»

Suprimo: *cuando se hallare presente*, porque me parece que es una especie de redundancia.

Si la jurisdiccion ha de ejercerla el Rector, solo cuando esté presente, entonces no tiene sino jurisdiccion parcial.

Yo entiendo que un funcionario ejerce la jurisdiccion aun cuando no esté presente. La obligacion de estar presente en cada uno de esos actos para poder ejercer jurisdiccion no la creo necesaria; porque cuando el vice-presidente de una comision cualquiera ó de una corporacion ejerce las funciones del presidente, está presente este; está presente el rector cuando el vice-rector preside las reuniones.

Tal es la nocion que tengo yo de lo que importa ejercer jurisdiccion: la que ejerce el empleo mas que el empleado cuando está este debidamente sustituido, segun lo determina la ley. Así el Presidente de la República ejerce jurisdiccion, y el Vice-Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo, ejerce la misma jurisdiccion que corresponde al Presidente.

Propongo la supresion de estas palabras: *cuando se hallare presente*.

Sr. Gallo (D).—Solo tiene un inconveniente: si le dá toda la jurisdiccion al Rector de la Universidad ¿para que sirven las Facultades?

Sr. Calvo—Ejercer la jurisdiccion entiendo yo que es la aplicacion de leyes y Reglamentos anteriores.....

Sr. Gallo (D).—Que los dicta el Consejo.

Sr. Calvo—Por consiguiente, si se establece en dos ó tres artículos de esta ley que los consejos son los que autorizan al Rector para ejercer una jurisdiccion determinada, no puede el Rector tener una jurisdiccion arbitraria; es necesario que esta jurisdiccion dependa de los estatutos anteriores.

Sr. Gallo (D).—Es evidente.

Sr. Calvo—Luego, pues, si es evidente eso, no es tan oscuro el proyecto, como se dice.

Sr. Gallo (D).—Cómo no ha de ser oscuro el proyecto?

Si el señor diputado me permite, voy á indicarle donde está la oscuridad.

Estamos de acuerdo en que debe haber un Consejo General que dicte las disposiciones convenientes y necesarias para la marcha de cada una de las facultades. Estas facultades son las encargadas de ejecutar los reglamentos que formule ese Consejo. Y si el señor diputado le dá toda la jurisdiccion, es decir, todo el cumplimiento de las resoluciones que dicte el Consejo, al Rector de la Universidad, yo le pregunto: ¿para que quedan las Facultades?

Sr. Calvo—Las facultades ejercen con el Rector funciones concurrentes; cada una parcialmente, determina lo que encuentra conveniente, sin perjuicio de que la jurisdiccion la ejerza el Rector en general.

Eso es lo que yo entiendo por jurisdiccion concurrente; es el jefe, el Rector de la Universidad, el que aplica la ley y ejerce la jurisdiccion, lo que no importa que cada una de las facultades tenga la jurisdiccion policial y disciplinaria que, para cada una de ellas determinen los Estatutos.

Algo análogo sucede en la Corte Suprema que ejerce jurisdiccion superior, sin embargo de que hay muchos tribunales inferiores que ejercen una jurisdiccion relativa en su esfera.

Sucede la misma cosa en el sistema federal segun el cual, las provincias, por ejemplo, ejercen una especie de jurisdiccion que ejerce, á su vez y en un órden distinto, el gobierno federal.

Y yo quisiera, señor Presidente, ver aplicado el sistema federal en las Universidades de la República, porque es donde deseo que se estudie para que brille en todo su esplendor.

Hago, pues, mocion para que se supriman estas palabras: *cuando se hallare presente*.

Desearia saber si esta indicacion tiene apoyo.

Sr. Presidente—El señor diputado tiene derecho de pedir que se voten especialmente estas palabras.

Puede hacer uso de su derecho votando en contra de ellas, cuando llegue la oportunidad, sin necesidad de solicitar apoyo de la Cámara.

Sr. Demaria—El señor diputado dá una inteligencia á este artículo completamente contraria á la que le ha dado la Comision.

La Comision entiende que son los decanos de cada una de las facultades los que ejercen la jurisdiccion, y que solo por escepcion la ejerce el Rector de la Universidad, cuando se encuentre presente.

Por consiguiente, si el señor diputado quita las palabras *cuando se hallare presente*, hace que el Rector quede sin jurisdiccion alguna, por que no la ejerce cuando no está presente. En este caso la ejercen los decanos de cada una de las facultades, dentro de sus propias atribuciones.

No es, pues, la idea de la Comision la que ha manifestado el señor diputado; es precisamente la contraria.

Sr. Calvo—Quiere decir que el Rector debe tener el don de la ubicuidad.

Sr. Demaria—No necesita tener el don de la ubicuidad, por que el Rector ejerce la jurisdiccion en los casos señalados por la ley, es decir, cuando se halle presente.

Sr. Gil—He entregado al señor secretario una redaccion que creo salva todas las dificultades que se han suscitado.

Sr. Gallo (D.)—Yo acepto cualquier redaccion que espese claramente el pensamiento de la Cámara.

Sr. Gil—Pediria al señor Presidente se sirviera ordenar la lectura de la redaccion á que me he referido, que consulta las observaciones muy justas de los señores diputados por la Capital y por Tucuman.

— Se lee:

El Rector es el representante de la Universidad — preside las sesiones de la Asamblea y del Consejo, «pu- diendo hacerlo respecto de las sesiones de las facultades, y ejecuta las resoluciones de todos los cuerpos universita- rios.»

Sr. Demaria—No es el Rector el que debe presidir las sesiones de las facultades.

Sr. Gallo (D.)—No me satisface la redaccion que se ha leído. Para salvar la dificultad que se presenta en este momento, de encontrar una redaccion que satisfaga, podriamos pasar á cuarto intermedio, donde mas fácilmente nos pondremos de acuerdo á este res- pecto.

— Apoyado.

Sr. Presidente—Invito á la Cámara á pasar á cuarto intermedio.

— Se pasa á cuarto intermedio.

— Vuelven á sus asientos los señores diputados.

Sr. Presidente—Continúa la sesion.

Se vá á dar cuenta de un asunto entrado.

— Se lee:

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

El Poder Ejecutivo Nacional.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1884.

Al H. Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse al H. Con- greso de la Nacion, acompañándole las notas que ha reci- bido de una comision formada en la provincia de Santiago del Estero, solicitando del Gobierno Nacional la suma de veinticinco mil pesos, á objeto de aumentar los fondos que

se destinan á la esposicion agricola industrial que se prepa- ra con motivo de la llegada del ferro carril.

El Poder Ejecutivo cree que en vista del plausible ob- jeto á que deben destinarse los fondos y de los benéficos re- sultados que producen siempre esposiciones como la que se prepara, es conveniente acordar la cantidad que se solicita, y, en consecuencia, pide á V. H. la sancion del proyecto de ley adjunto.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

BERNARDO DE IRIGOYEN.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY

Art. 1º Autorizase al P. E. para contribuir con la su- ma de veinticinco mil pesos á la esposicion agricola indus- trial que se prepara en la provincia de Santiago del Este- ro, con motivo de la llegada del ferro-carril á su capital.

Art. 2º El gasto autorizado por la presente ley, se im- putará á la misma,

Art. 3º Comuníquese al P. E.

IRIGOYEN.

(A la Comision de Hacienda.)

UNIVERSIDADES NACIONALES

Sr. Presidente—La Comision de Instruc- cion Pública ha presentado en sustitucion de la base segunda del proyecto en discusion, la que vá á leer el señor Secretario.

— Se lee:

«El Rector es el representante de la Universidad — preside las sesiones de la Asamblea y del Consejo y eje- cuta sus resoluciones. Corresponde así mismo al Rector el puesto de honor en todos aquellos actos de solemnidad que las facultades celebren.»

Sr. Presidente—Si no se hace oposicion, se considerará autorizada á la Comision para reemplazar su anterior despacho por el que se acaba de leer....

Se vá á votar si se acepta la base segunda con la redaccion que se acaba de leer.

— Resulta aprobada.

— Se pone en discusion la base tercera.

Sr. Yofre—Ha llegado la oportunidad de consignar en esta ley la modificacion que antes de ahora propuse: fijar el número de dele- gados y agregar las palabras: *de su seno*.

Desearia que la Comision manifestara su opinion sobre esas modificaciones.

Sr. Demaria—Dos miembros de la Comision aceptamos que se diga y *de dos delegados*, su- primándose en consecuencia, las palabras *ó mas*.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruc- cion Pública—Pido la palabra.

Tratándose de bases generales, yo creo que

debe dejarse mas amplitud á las Facultades y á la Universidad, sin que haya propiamente conveniencia en que el Congreso entre en detalles. Las Facultades estan en aptitud de apreciar las conveniencias que hay en constituir el Consejo Superior con dos ó tres delegados. Tambien están en aptitud de apreciar si esos delegados han de ser, como creo que deberian serlo y como es justo que lo sean, miembros de las Facultades. Pero no veo que haya contradiccion alguna en que las facultades nombren, como delegados al Consejo Superior, á personas que no sean de su seno.

No creo que esto llegue á suceder, pero debe dejarse á los reglamentos ó á los estatutos que formulen las Universidades, el entrar en estos detalles, porque si nosotros entramos á ocuparnos de ellos, las bases no van á ser generales, van á ser una reglamentacion, una sustitucion completa y detallada de los estatutos.

Me parece, pues, que esta observacion, y la de la necesidad de no producir grandes alteraciones que tienen á su vez que ser discutidas en el Senado, y la urgencia que hay en dictar esta ley, han de decidir á la Cámara á no ocuparse detenidamente de estos detalles, dejando á las Facultades que designen el número de delegados que han de mandar.

He dicho.

Sr. Yofre — Yo creo que el pensamiento que preside esta ley es el de dictar los estatutos de las Universidades, haciendo de ellas una institucion corporativa, es decir, creando una verdadera corporacion universitaria con mas ó menos facultades de autonomia.

Por consiguiente, insisto en mi indicacion respecto á que los delegados hayan de ser del seno de las facultades, porque de otra manera se podria recurrir á personas completamente estrañas á la corporacion y que fuesen ó nó graduadas, para darles la calidad de delegado.

En cuanto al número, creo que podria ofrecer dificultades permitir que el Consejo Superior pueda tener un número ilimitado de miembros, porque podria entonces organizarse un Consejo demasiado numeroso; y en la reglamentacion de esta ley no es un detalle tan insignificante entrar á legislar sobre el número de miembros que haya de componer el Consejo Superior, que tendrá facultades tan amplias como las que estamos sancionando.

Por estas consideraciones, insisto en que los delegados hayan de ser elegidos del seno de las facultades, ó por lo menos graduados en ellas. No dejar libertad para traer personas completamente estrañas á los intereses de la corporacion, porque como decia, el pensamiento predominante es legislar para una institucion de esta naturaleza, dándole el carácter de una Universidad, es decir, corporativa.

Estas son las razones que tengo para no aceptar la opinion del señor Ministro, por mas ilustrada que la considere.

He dicho.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pido la palabra.

Me voy á permitir agregar una consideracion mas en apoyo de las ideas del señor diputado por Córdoba.

Creo que es no solo conveniente, sino necesario, al dar esta ley fijando las bases para los estatutos universitarios, que se consigne el número de delegados que debe enviar cada facultad, para, con el conjunto de dichos delegados, formar el Consejo Superior universitario.

Las atribuciones mismas que se dá al Consejo Universitario, en esta ley que discutimos, son atribuciones delicadas é importantes, segun las cuales podria derogar resoluciones tomadas por alguna de las facultades, puesto que las resoluciones de las facultades tienen que ir al Consejo Superior, para ser dilucidadas en él y recibir su aprobacion ó desaprobacion.

Si en la ley que se está discutiendo no se fija desde ahora el número de delegados de cada facultad, resultará que habrá competencia entre las diversas facultades, con el objeto de tener mayor preponderancia en el Consejo superior. Si dejamos á cada facultad este derecho de fijar el número de sus delegados, resultará que una nombrará tres, otra nombrará cuatro...

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Nó; porque en los estatutos se pondria el número.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pero se deja ese derecho á las facultades; porque dice el artículo: «El Consejo se formará del rector, de los decanos de las distintas facultades, y de dos ó mas delegados que estas nombren.»

Lo que implica que cada facultad tiene derecho á darse sus estatutos, fijando el número de delegados.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Nó; son los estatutos los que señalarán el número de delegados.

Sr. Figueroa (F. J.)—Por lo mismo, entonces, que no haya ni motivo de discusiones y divergencias entre las diversas facultades.

Porque tendrian que entrar á esta discusion: si tienen el derecho esclusivo, en virtud de esta ley, de poder hacer, cada una particularmente, el nombramiento de sus delegados, y de fijar su número.

Véase todas las divergencias que sobre vendrian para formar el Consejo, es decir, la autoridad superior que tiene la Universidad, si no estableciésemos desde ya el número de delegados, dos ó tres.

Esto me parece muy necesario, con lo que se salva el inconveniente que apuntaba: que haya divergencias entre las diversas facultades de la Universidad.

Sr. Crespo—Pido la palabra.

Habia aceptado la modificacion hecha por el señor diputado por Córdoba, á invitacion de mi honorable colega el miembro informante de la Comision; y la habia aceptado, nó porque creyera que el espíritu de esta base pudiera interpretarse de tal modo que el número de delegados hubiera de ser nunca ilimitado, ni de quedar al arbitrio de cada una de las facultades, ni tampoco porque creyera que estaba en el espíritu de esta misma base el permitir á cada Facultad, que, al nombrar sus delegados, hubiera de buscar miembros agenos á la corporacion. Por ninguna de estas razones; porque he creido que el espíritu de esta base no importaba ni uno ni otro hecho. La he aceptado simplemente porque creo que es bueno limitar el número de miembros de que se ha de componer el Consejo Superior y como esta es una corporacion formada por los delegados de cada Facultad, me parece que seria muy conveniente fijar el número de delegados.

Hay que tener en cuenta una circunstancia: que, como se desprende de esta misma base, los decanos de cada Facultad son delegados obligados, delegados forzosos, de modo que á estos delegados obligados no hay mas que agregar dos miembros que los han de acompañar en el Consejo Superior.

Así, pues, acepto la indicacion de que se limite el número. Y creo que, contando con que el decano de cada Facultad es delegado forzoso, debe limitarse á dos el número de los que se elijan.

He dicho.

Sr. Navarro Viola—Queda pendiente la otra indicacion del señor diputado por Córdoba, que me parece importante: si los delegados han de ser del seno de las facultades.

Sr. Presidente—Entendia que la Comision habia aceptado tambien esa indicacion.

Sr. Navarro Viola—Desearia saber el motivo que haya tenido la Comision para hacer intervenir la aprobacion del Ministerio, en la fijacion de los derechos universitarios.

Hago esta pregunta, porque recuerdo que el miembro informante de la Comision nos ha dicho, (y por otra parte es notorio), que la tendencia de las universidades es ir buscando su autonomia, ir asemejándose á las universidades alemanas; y me parece que hasta cierto punto se despegas de este artículo una ingerencia que, además, no está justificada con la única razon que el miembro informante de la Comision encontraba en la suministracion

de los elementos pecuniarios que hace el Poder Ejecutivo.

Está bien, entonces, que se haga intervenir al Poder Ejecutivo en puntos que están ligados intimamente con esa provision de fondos, pero nó en la apreciacion que hagan las facultades del costo de una matrícula, de un diploma, etc.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

No es la Comision, señor Presidente, la que ha establecido esta prescripcion en el proyecto. Debe notar el señor diputado que así ha venido del Senado.

Sr. Navarro Viola—¿Por qué la ha dejado permanecer, entonces?

Pregunté mal.

Sr. Demaria—La ha dejado permanecer, como dice el señor diputado, porque—si bien es cierto que la Comision cree, como lo manifestó anteriormente, que las universidades deben ser, en cuanto sea posible, autonómicas y que á ello tiende el proyecto, puesto que el señor diputado encontrará un artículo por el cual se manda á las universidades que se procuren sus fondos propios, en el deseo de que con el tiempo, y cuando esos fondos sean bastantes, estén completamente independientes del Poder Ejecutivo,—tambien es cierto que actualmente no pueden ellas aspirar á esa independencia, por cuanto es el tesoro público quien les suministra los fondos que necesitan.

Entonces, pues, como tambien lo cree el señor diputado, es necesario establecer un vinculo entre las universidades y los poderes públicos; y es el objeto principal de esta ley establecer bien, deslindar cual es el caracter propio de las universidades en su régimen, y cuales son sus relaciones con los demas poderes.

Se ha dicho en el proyecto, y probablemente ha sido el espíritu de su autor, que la fijacion de estos derechos universitarios deberá tambien hacerse con acuerdo del Poder Ejecutivo,—ó con el del Ministro de Instruccion Pública, que es lo mismo,—siguiendo estas mismas teorías, es decir, dándose cuenta de como no pueden ser en la actualidad completamente independientes, y de que es necesario al Poder Ejecutivo, como administrador de las rentas públicas, hacerse cargo hasta donde puedan alcanzar.

Esta es la interpretacion que le ha dado la Comision, esta es la necesidad que ha creido habia de esta prescripcion, y ha sido esa, probablemente, la mente del autor del proyecto.

Sr. Navarro Viola—Pido la palabra.

Siento no darme por satisfecho con la explicacion del señor miembro informante de la Comision.

Como no se trata de un punto tan de deta-

lle, sino que afecta principios fundamentales, no trepido en recordar palabras muy pertinentes, porque precisamente eran pronunciadas por el miembro informante de la Comision. cuando en el año 1873 se aprobaba en las Cámaras de la República francesa, la ley de enseñanza superior; palabras que dan un verdadero carácter á esta tendencia de ir independizando las universidades, y á la marcha progresiva que este pensamiento ha seguido.

En Francia mismo, donde indudablemente no se habrá conquistado en muchos años estas libertades, sinó con dificultades que felizmente no tenemos entre nosotros, Eduardo Laboulaye decia, informando sobre el despacho del proyecto de enseñanza superior, estas palabras:

«No estamos ya en los tiempos en que Royer Collard podia decir á la Cámara que la Universidad no era otra cosa que el Gobierno aplicado á la direccion universal de la instruccion pública, y proclamaba, como una máxima incontestable, que la universidad ha sido establecida sobre esta base fundamental: que la instruccion y la educacion públicas pertenecen al Estado y están bajo la direccion superior del Rey. Esta mano puesta sobre el espíritu de las generaciones nuevas; este derecho reconocido al poder público, de modelar á su manera á la juventud, son hoy rechazados por todos los partidos, sin distincion de opiniones. Hemos concluido con el ideal monárquico, que veia en el principio á un padre de familia que arreglaba á su paladar la educacion de sus hijos. Rechazamos la concepcion antigua, renovada por la Revolucion, que hacia del ciudadano el esclavo y la cosa de la República. Ni admitimos tampoco que el establecimiento de la universidad sea, como lo decia el príncipe Napoleon, un medio de dirigir las opiniones políticas y morales. Lo único que pedimos al Gobierno, es que se limite á garantizar la seguridad general y la libertad privada. Lo que le rehusamos es que se sustituya á la familia y al individuo. Y este cambio de ideas es el que hace necesario el cambio de instituciones.»

Y bien, señor Presidente, ya que no podemos de un golpe cambiar las instituciones, aprovechemos la ocasion que se presenta en cada ley, para ir tendiendo al objeto que se desea; porque es axioma de derecho, que el que quiere el fin, quiere los medios.

Afortunadamente, tengo en mi apoyo una opinion considerable, la opinion del señor Ministro que se encuentra aquí.

Esa opinion ha sido puesta en práctica, y forma parte de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires, y supongo que tambien de los de la de Córdoba.

El inciso del artículo que está en discusion dice: «Fija los derechos universitarios con la aprobacion del Ministerio de Instruccion Pública.» Pero el inciso 3º de los estatutos que vienen rijiendo desde 1882, dice:—«Art. 9. Corresponde al Consejo Superior:—3º Fijar los derechos de grados» (sin aprobacion de nadie) «de matriculas, de certificados, de estudios ú otros emolumentos que deban pagar los estudiantes ó los que soliciten revalidar sus diplomas.»

Como he dicho, este estatuto provisorio es un decreto del Poder Ejecutivo, que lleva la firma del mismo señor Ministro que se encuentran en este recinto.

Entonces, yo digo: no retrocedamos, ya que tenemos un decreto del Ejecutivo que ha rejido esta materia, que no ha ofrecido la mínima dificultad, y puesto que debe confiarse en que las facultades no han de abusar en el sentido de elevar demasiado sus derechos, que sería el único peligro, porque esto estaria relacionado con el deseo de realizar cuanto antes la independencia de la institucion.

Me parece que debemos respetar este hecho y que debemos respetar este derecho, puesto que al fin se trata de un decreto del Poder Ejecutivo.

He de votar, pues, en contra de este inciso, para lo cual pido se vote por partes, salvo que la Comision encontrase acertadas estas razones y consintiese en la eliminacion de la parte que lo objeto.

He dicho.

Sr. Demaria.—Pido la palabra.

Yo no doy á esta prescripcion la importancia que le dá el señor diputado.

Soy, por caracter, uno de los mas decididos partidarios de la idea de independizar las personas de la influencia que puedan ejercer los poderes sobre ellas.

Pero debo decir, en este caso, que aquí no tienen aplicacion las ideas contenidas en lo que acaba de leer el señor diputado, del señor Laboulaye. No es el caso de dar á un poder público una superintendencia completa en la universidad, que es el único caso á que pueden aplicarse las palabras leidas anteriormente.

He manifestado antes que la Comision desea, como estoy seguro que desean todos los señores diputados, que las universidades sean independientes; pero han de comprender todos tambien que, por el momento, no pueden serlo.

Esta prescripcion es puramente, para la buena administracion; y así lo comprenderá el señor diputado si se toma la molestia de leer el inciso 7º, el cual dice: «Los derechos universitarios que se perciban, constituirán el fondo universitario, con escepcion de la parte

que el Consejo Superior asigne, con la aprobacion del Ministerio, para sus gastos y para los de las facultades.»

Sr. Navarro Viola — A ese inciso me refería, precisamente.

Sr. Demaria — Perdone el señor diputado.

Si relaciona este inciso con el que tratamos actualmente, va á ver el señor diputado que si señor Ministro es quien debe proveer de fondos á la Universidad, para los gastos que se ocasionen, le es necesario tambien conocer cuanto es la parte con que puede contribuir la Universidad.

Sr. Navarro Viola — Es bueno no confundir la primera parte con la segunda del inciso 7°.

La primera parte dice: «Los derechos universitarios que se perciban, constituirán el fondo universitario», y esa esa ha sido la base de mi argumentacion. Puesto que constituyen el fondo universitario sumas que no proceden del Poder Ejecutivo, ¿á qué pedir la aprobacion de él para resolver que una matricula valga cinco ó diez pesos?

Sr. Demaria — Tengo la desgracia de no saberme explicar y por eso....

Sr. Navarro Viola — Probablemente será yo que tendré la desgracia de no poder comprender.

Sr. Demaria — Decía, hace un instante, al Sr. Diputado lo siguiente: que en este inciso 7° se establecía que, una vez fijados los derechos que debe percibir la Universidad, una parte de ellos irá á constituir el fondo universitario, y otra parte servirá para subvenir á las necesidades de la universidad misma, y entonces sacamos esta consecuencia: si esto ha de ser así, como lo establece el inciso 7°, es necesario que el señor Ministro conozca á cuanto ascienden esos recursos con que puede subvenir la Universidad á sus propias necesidades, para saber cuanto es lo que le falta.

Sr. Navarro Viola — Pero no necesita intervenir en el impuesto para saber lo que produce.

Sr. Demaria — Necesita saberlo, porque necesita conocer á cuanto ascienden los recursos que puede dar la Universidad para relacionarlos con los que el Poder Ejecutivo puede suministrar.

Así, por ejemplo, si las facultades estuvieran en tal estado que pudieran cómodamente subvenir á todas las necesidades de la Universidad, entonces el señor Ministro manifestaría, en el Consejo, la conveniencia de que estos derechos se elevaran á la menor suma posible. Si, por el contrario, el erario público necesitara, para satisfacer otros gastos, la suma destinada al objeto, y no tuviera disponible una cantidad suficiente para darle á la Universidad, el Ministro lo haría presente al Consejo, para

que este elevara los derechos y contribuyera con alguna porción mas á llenar sus propias necesidades.

Esto es todo lo que importan los dos incisos, relacionados el uno con el otro. Vé, entonces, el señor diputado, que no es materia de influencia directa, como lo entiendo, del Poder Ejecutivo sobre la Universidad.

Sr. Navarro Viola — Directa ó indirecta, no he dicho nada sobre eso.

Sr. Dávila — Me permite una pregunta?

Si el Sr. Ministro no quiere aprobar el proyecto de derechos de las facultades universitarias ¿á qué queda reducida la facultad de estas corporaciones para establecer derechos de matrícula? Entonces el señor Ministro puede casar este proyecto de emolumentos ó de derechos, como quiera llamársele.

Deseo saber si en esta base está incluida la facultad del Ministerio para *desaprobar*.

Sr. Demaria — En este caso, como en otros de este género, en que se dá intervencion al Poder Ejecutivo, la Comision ha entendido que este tenia la facultad de deliberar conjuntamente con el Consejo y establecer todas estas prescripciones de comun acuerdo.

Esto es lo que la Comision ha entendido, y lo que se desprende del proyecto.

Sr. Dávila — Es decir, que el señor Ministro de Instruccion Pública, separado de sus funciones como secretario refrendador de los actos del Presidente, vá á tomar parte, como representante del Poder Ejecutivo, en las resoluciones del Consejo? ¿Tiene voto en el Consejo? ¿En qué forma se establece esta intervencion del Ministro? No entiendo bien.

Es el Consejo quien resuelve sobre los derechos universitarios y pasa el proyecto, para su aprobacion, al Ministerio. El Ministro lo aprueba ó lo casa, es decir, lo hace desaparecer en el último caso. Entonces, si lo hace desaparecer como poder público, digo que el inciso está mal, porque el Ministro sin el Presidente de la República, no puede tener este género de atribuciones.

Sr. Demaria — No puede hacerlo desaparecer, señor Presidente, puesto que la ley establece que se ha de cobrar derechos universitarios; y desde el momento que la ley establece esto, el Ministro no puede dejar sin efecto el mandato de la ley: tiene que ponerse de acuerdo con el mismo Consejo para establecer cuales sean los derechos á cobrar.

Sr. Dávila — Pero supongo el caso de que no haya armonía: que el Ministro sostenga una cosa y el Consejo otra. El Ministro ¿casa la resolucion, es no la casa? ¿Qué propone la Comision para ese caso? ¿No sería mejor la supresion que ha propuesto el señor diputado por la Capital?

Sr. Demaria—Pero le manifiesto que no es la supresion lo que corresponde.

Sr. Dávila—Corresponde.....

Sr. Demaria—No, porque tiene este otro peligro, que ya lo ha insinuado el mismo señor diputado por la Capital: que la Universidad, en el deseo de independizarse lo mas pronto posible del Poder Ejecutivo, establezca derechos muy crecidos.

Sr. Navarro Viola—Yo decia que no podia suponerse ese peligro en facultades que se respetan.

Sr. Demaria—Y yo decia que lo habia insinuado por eso.....

Sr. Navarro Viola—Haga sus insinuaciones de cuenta propia.

Sr. Dávila—La objecion que hace el señor diputado se puede contestar en esta forma: que si concentramos en manos del Poder Ejecutivo ó del Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública, como lo dice el proyecto, la facultad de hacer la verdadera fijacion de estos derechos, resultaria que si el Poder Ejecutivo quisiera conservar siempre concentrado en sus manos el poder sobre la Universidad, lo conseguiria perfectamente con solo tratar de que los derechos fueran tan exiguos que nunca formaran un fondo importante y por consiguiente, nunca se llegaria á la independencia de la institucion.

No hago la observacion sinó por oponerla á la que hace el señor diputado.

Sr. Demaria—Luego, la otra tiene algun peso.

Sr. Dávila—Luego, no tiene ninguno, porque desaparece en presencia de la segunda.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Pido la palabra.

Sr. Presidente: para ser independiente es necesario bastarse á si mismo. Primera regla.

No comprendo un procedimiento en virtud del cual se reclama sobre las desventajas y se deja subsistente todas las ventajas.

Nuestras universidades no pueden vivir por si solas,—es un hecho. Viven del poder público; si el poder público no les dá los medios de subsistencia, no pueden subsistir; si no les paga su presupuesto, tienen que cerrar sus aulas.

No tienen fondos propios. Por consiguiente, no se puede todavia invocar su independencia.

A este respecto podria estenderme mucho; pero creo que cansaria á la Cámara.

Tratándose del punto en cuestion, es cuando menos se puede establecer independencia.

Vemos siempre á las Cámaras muy afanosas y decididas por conservar sus prerogativas, sobre todo cuando se trata de dineros públicos, de administracion, de riqueza pública, del tesoro público. No sé entonces por que se

desprenderian en este caso de la facultad de ejercer cierta vijilancia, cuando se trata precisamente de fondos.

Se sabe bien á lo que tienden estas corporaciones, como tambien los individuos: á entenderse, á elevarse, á disponer de mayor influencia, para hacer mas eficaces sus resoluciones.

Si no se estableciese algun control sobre esta autorizacion que se acuerda á las facultades universitarias, para imponer ciertos derechos, habria mucho peligro de que estos derechos fueran escesivos, como ha manifestado el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, y entonces el Congreso, del cual dependerian, en cierto modo, las universidades, no tendria con ellas ni la vinculacion que establece este artículo, por medio del Poder Ejecutivo.

El Congreso, por ejemplo, no puede vijilar esta especie de imposicion de contribucion, porque realmente los derechos universitarios son una imposicion de contribucion sobre determinada parte de la poblacion y corresponde al Congreso imponer contribuciones, y ningun otro, á no ser que medie, por parte de este, una delegacion, concesion ó tolerancia, puede hacerlo.

Muy bien: si el Congreso da la facultad de imponer, sin control ninguno, esta contribucion, se desprende de una de sus mas grandes atribuciones; mientras que manteniendo esta vinculacion de la Universidad con el Ministerio, toma en cierto modo, intervencion en la cosa, por que es el Poder Ejecutivo quien determina la distribucion de ciertos fondos, de acuerdo con las leyes vigentes: quien vigila la inversion de los fondos dados por el presupuesto, etc., etc.

Así, encuentro muy justo que esta vinculacion exista y que el Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública (se sabe que al decir Ministro se dice Presidente de la República, Poder Ejecutivo) vijile en cierta manera y contenga en ciertos límites á las facultades, controlándolas en sus ambiciones legítimas, pero quizá tambien exageradas, por las cuales sean tal vez llevadas á establecer contribuciones escesivas sobre determinada parte de la poblacion.

Ahora, no se puede invocar tampoco que en los estatutos vigentes no se halle establecida esta condicion.

Precisamente los estatutos vigentes han sido mandados al Congreso para que este, en su alta sabiduria, corrija los defectos, y yo encuentro que este es un defecto y una imprevision de los estatutos mandados.

Sr. Navarro Viola—Muy hábil!

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Gracias, señor.

En virtud de estas consideraciones, yo ro-

garia al señor diputado que retirara su indicacion, para borrar esta parte de la base tercera, dejándola subsistente como está.

Ahora, respecto á la independencia de las facultades, yo oigo con mucha frecuencia invocar las ventajas que resultarían de esto.

He leído también algo como los señores diputados, y creo que me creerán cuando afirmo esto: que hasta ahora no he llegado á convencerme de la ventaja real que haya en semejante independencia.

Sr. Navarro Viola—Así sucede con todas las independencias! No hay nada que no sea discutible.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Así es!

Las universidades en los países donde están establecidas con esa independencia, son asociaciones particulares, dan diplomas como los da una asociacion cualquiera:—el Club del Progreso, el Club de los Negros, una sociedad de Carnaval ó el Instituto Geográfico. No tiene mas valor que el que depende de la autoridad científica ó de la autoridad propia de la institucion que da esos diplomas.

Entre nosotros, no. El poder oficial, el Estado, el Gobierno protege, en cierta manera, á los individuos que salen con un diploma de sus universidades. Este diploma vá sellado con el sello de la autoridad nacional y sus funciones están en cierto modo protegidas. Hay una especie de garantia adherida al diploma dado por una universidad que subsiste en virtud de leyes nacionales, y las instituciones que tienen este carácter, espiden diplomas, dan certificados, títulos que tienen ante el mundo, en general, mucho mayor valor que los de las Universidades particulares, salvo los casos en que estas han llegado á tener una alta reputacion, y solamente en esos casos las disposiciones de estas Universidades pueden ser acatadas. Entonces han conquistado la facultad de imponer determinadas contribuciones, de elevar sus derechos, de poner trabas á la entrada á sus cursos, en fin, de darse todo el mérito que su reputacion adquirida les dá derecho á tener.

Pero, invocar esto en general, y tender á que exista entre nosotros, cuando se vive tan á espensas del gobierno, y cuando es imposible la existencia de una Universidad sin el apoyo, y, casi diré, sin la imposicion del gobierno, es cuando menos inoportuno, y no debe invocarse para todas las ventajas cuando no se invoca para las desventajas.

Así, pues, hay que tomar como punto de partida la necesidad y el hecho real de la dependencia efectiva de las corporaciones universitarias con respecto al Estado, y proceder sobre esa base.

Entonces teniendo en cuenta eso, no se puede negar la facultad con la cual el Congreso,

el Estado, por medio del Ministerio de Instruccion Pública, interviniere cuando menos en esto: en la fijacion de los derechos, en la aprobacion de todo lo que importa una contribucion que se impone á cierto gremio de la poblacion.

Así, pues, creo que esto debe quedar como está propuesto, corrijiendo en esa parte el estatuto vigente.

He dicho.

Sr. Navarro Viola—Pediria que se leyera el artículo 89 de la Constitucion.

— Se lee:

« Los Ministros no pueden, por si solos, en ningún caso, tomar resoluciones, á escepcion de las concernientes al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. »

Sr. Navarro Viola—Por consiguiente, los ministros no pueden aprobar nada; es el jefe supremo de la Nacion, como lo llama la Constitucion.

Sr. Ministro de Justicia Culto é Instruccion Pública—Se entiende que no es el Ministerio! El Ministerio por sí solo no es tal Ministerio!

Sr. Navarro Viola—Las leyes no deben entenderse; deben decir....

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Cuando las palabras tienen un valor aceptado, no puesto en duda por nadie, se entienden.

Sr. Navarro Viola—Puesto en duda por todo el que lee la Constitucion!

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—¿Que quiere decir Ministerio de Instruccion Pública?.....

Sr. Navarro Viola—Yo pregunto al señor Ministro, que quiere decir que el Ministro aprueba?

Yo sostengo que es inconstitucional decir en una ley que el Ministro aprueba ó desaprueba!

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Eso no quiere decir sino que el Presidente aprueba.

Sr. Navarro Viola—Ah! el Ministro quiere decir que el Presidente aprueba?

No sabia que el Presidente estaba presente!

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—El Ministerio, se entiende.

Sr. Navarro Viola—Eso lo que prueba es que todo puede sostenerse; pero esto es lo que menos puede sostenerse segun las palabras de la Constitucion.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Entonces que se ponga: el Poder Ejecutivo.

Lo que yo entiendo que ha querido decir este artículo, no es que el Ministro, sino que el Poder Ejecutivo aprueba.

Sr. Navarro Viola—He pedido que se vote por partes para votar en contra, póngase ó nó Ministro ó Poder Ejecutivo. Ahora combato hasta las palabras.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública—«El Ministerio de Instrucción Pública,» dice.

No hay sino el Presidente encima de él.

Sr. Navarro Viola—Eso es alambicar demasiado las cosas!

Sr. Presidente—Entiendo que la indicación del señor diputado por Córdoba ha sido aceptada por la Comisión, y esta primera parte del artículo se leerá en esta forma.

— Se vota por partes la base 3ª y se aprueba en esta forma:

«El Consejo Superior se compone del rector, de los decanos de las Facultades y de dos delegados que estos nombren de su seno. Resuelve en última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado las Facultades — fija los derechos universitarios....»

Sr. Presidente—Ahora se votará: con la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública.

Sr. Demaria—Como miembro de la Comisión debo decir que ella ha entendido como ha entendido la Cámara repetidísimas veces y no hay mas que traer una ley para encontrar que á cada paso la Cámara ha dictado leyes que se refieren al Ministerio y no al Poder Ejecutivo, porque es mas propio, porque esto no importa sinó designar el Ministerio con el cual ha de entenderse esta repartición.

Sr. Navarro Viola—*Multum probat, nihil probat!*

Cite una ley!

Sr. Presidente—Parece impropio que se esté discutiendo cuando se está votando.

Sr. Navarro Viola—Se está votando para todos, aun para el miembro informante!

— Se votan las palabras: con la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública, y se aprueban.

— Se aprueba el resto de la base 3ª.

— En discusión la base 4ª.

Sr. Navarro Viola—Pido la palabra.

Me parece que la Comisión no vá á tener inconveniente en aceptar un agregado, que es sumamente esencial, mucho mas, cuando descendiendo aquí á detalles que hacen innecesaria otra clase de aseveraciones anteriores.

«Reformar y aprobar programas.»

Esto supone que debe haber planes de estudios.—¿ Quien dicta esos planes de estudios?

Una grave cuestion seria saber si los planes universitarios pueden dictarlos las facultades ó el Congreso, como dice la Constitución.

Pero, en el supuesto que lo que esta ley importa no es una delegación que hacemos en las facultades, yo diria: es necesario asentar aquí, en este artículo, esa autorización que tiene cada facultad de dictar los planes de estudios.

Hay otro punto esencial, y es la expedición de diplomas en las profesiones científicas. ¿ Quien los espide? Aquí no se dice, y, puesto que se dice tantas otras cosas que son de segundo orden, me parece muy esencial agregar esto.

A esta última consideración, yo agregaria algo sumamente práctico.

Ha llegado el caso de haberse hecho una concurrencia de poderes en la expedición de diplomas de *abogados*: la Exma. Cámara de lo Civil ha entendido que era de su incumbencia expedir estos diplomas, y la Facultad de Derecho ha seguido espidiéndolos con arreglo á sus estatutos.

Me parece, entonces, que, no ofreciendo dudas, como creo que no ofrece, que deben ser las facultades las que espidan los diplomas en las profesiones científicas, y existiendo esta concurrencia, que entiendo que no puede sostenerse, seria conveniente decir: *Expedirá exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas.*

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública—Me permite una observación?

Quizá seria conveniente modificar en esa parte la redacción que está proponiendo, insinuando que las facultades espidan los certificados en virtud de los cuales la Universidad dá el diploma, porque es mas natural que sea la Universidad, que tiene una existencia *sui generis*, y que es la que mantiene relaciones con el exterior.

Sr. Navarro Viola—Perfectamente. Aceptado.

Sr. Presidente—Pediría al señor diputado que indicase la forma que acepta.

Sr. Navarro Viola—Acepto la forma propuesta por el señor Ministro.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública—Podria quedar así:

«Cada Facultad ejercerá jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos; dará los certificados de exámen en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas.»

Sr. Presidente—No sé si esta indicación es aceptada por la Comisión?

Sr. Gallo (D.)—¿Está en discusión el artículo en esa forma?

Sr. Presidente—No sé si ha sido aceptada; pero como es una indicación separada....

Sr. Gallo (D.)—Pido la palabra.

Me parece que bajo una forma modesta, la indicacion del señor diputado por la Capital encierra una cuestion constitucional sumamente grave.

El señor diputado propone por su modificacion, que se dé á las facultades universitarias el derecho de establecer los planes generales de instruccion; y por el inciso 16 del artículo 67 de la Constitucion, esta es una facultad que corresponde al Congreso Nacional.

Sr. Navarro Viola—Es á lo que me habia referido al principio. Por eso decia que parto de la base de que la Cámara entienda de que no es una delegacion.

Sobre eso estriba mi indicacion.

Sr. Gallo (D.)—Perfectamente. Sin embargo, tal como el señor diputado propone el artículo, lo que se hace es una verdadera delegacion.

El Congreso, dice por medio de esta ley: las distintas facultades de las universidades tienen el derecho de establecer los planes generales de instruccion universitaria como estimen conveniente y sin embargo, es esta una facultad del Congreso, con arreglo á la Constitucion.

Entonces viene la cuestion constitucional á que me he referido. ¿Puede el Congreso, por medio de una ley, delegar facultades que le son propias?

La contestacion es un axioma en derecho constitucional: ningun poder constituido puede delegar una facultad constitucional en nadie. Tiene el derecho de ejercer sus facultades, y tiene el deber de conservarlas y defenderlas en todos los casos y en todas las circunstancias.

Yo comprendo que las universidades ó facultades puedan mientras el Congreso no haga uso de esta facultad que le es exclusivamente propia, dictar planes provisorios de instruccion universitaria; pero me parece que nosotros no procederíamos correctamente desprendiéndonos de ella, lo que no tenemos derecho de hacer, diciendo por medio de una ley que esto puede corresponder á las facultades universitarias.

Me parece, pues, que el artículo queda mejor tal como lo propone la Comision, guardando silencio á este respecto y dejando que las cosas continúen como hasta ahora, en que las facultades dictan los planes generales, aprueban los programas, etc, quedando siempre libre la facultad del Congreso para cuando quiera dictar el plan general de instruccion universitaria. Creo que así salvamos los inconvenientes y no tocamos el artículo constitucional, que correria grave riesgo de ser atacado fundamentalmente por el proyecto sancionado en la forma que se propone.

— Varios señores diputados piden la palabra. El señor Presidente la concede al Dr. Navarro Viola que la pidió primero.

Sr. Navarro Viola—Seré sumamente breve.

Queria decir, simplemente, que la objecion que acaba de hacer el señor diputado era mas bien dirigida á la oposicion que hizo el señor diputado por Catamarca, cuando atacó el proyecto en general; porque nos estamos ocupando de tal manera de esta ley, que es imposible prescindir de los planes generales de estudios, cuando autorizamos la aprobacion de los programas y hasta la intervencion del Ministerio en la fijacion del precio de las matrículas, etc.

Entonces, abordemos francamente la cuestion y si es inconstitucional la ley, mas vale que nos detengamos á tiempo no sancionándola. Pero si hemos de dictarla, si se comprende que no hacemos una delegacion de facultades en el Consejo Universitario, entonces es indispensable ocuparnos de la indicacion que habia hecho, que comprende planes de estudios.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—¿Pero no se salvaria todo poniendo, que mientras el Congreso no dicte el plan general de instruccion universitaria...

Sr. Gallo (D.)—Siempre es delegacion.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—...las facultades aprobarán ó reformarán los programas?

Sr. Gallo (D.)—Yo digo que queda bien como propone la Comision: sin decir nada. Y respecto á la observacion del señor diputado por la Capital, si me permite el señor Presidente....

Sr. Presidente—Habia pedido la palabra el señor diputado por Entre-Rios.

Sr. Navarro Viola—Yo no habia concluido. Sin embargo, tengo mucho gusto en ser interrumpido.

Sr. Gallo (D.)—No era interrupcion, creia que habia terminado.

Sr. Navarro Viola—Iba á decir que tal vez lo único que habria salvador á este respecto seria esto: en el artículo 20, donde dice: «Los estatutos dictados por los consejos superiores, con arreglo á las bases anteriores, serán sometidos á la aprobacion del Poder Ejecutivo,» podria decirse: «Los estatutos y los planes de estudios proyectados por los consejos superiores, con arreglo á las bases anteriores, serán sometidos al Congreso.»

De este modo tendríamos proyectado todo lo que necesitáramos y se salvaria la objecion del temor que hay de que pasara mucho tiempo sin dictarse ley tan necesaria.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Habia dictado dos veces la

misma ley. Para hacer eso no vale la pena de dar bases generales.

Sr. Navarro Viola—Yo salvo como puedo la dificultad.

Ahora desearia que el señor Ministro salvara como pudiera el artículo constitucional.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Muchas veces, por ejemplo, en lo que se acaba de aprobar, hay una delegacion; pero por esa delegacion se llega á un *modus vivendi*, que es un medio moderno de pasar el tiempo.

— Risas

Acaba de dictarse una disposicion, en virtud de la cual se cobra cierta contribucion—los impuestos universitarios son contribuciones—y nadie tiene facultad de imponerlas sino el Congreso. Esto es evidente y sin embargo, acaba de votar esta misma Cámara una delegacion autorizando á las universidades para imponer esa contribucion.

Entonces, ¿porqué no ha de hacer el Congreso, como podria hacerlo con toda facilidad, respecto á los planes de estudios, que no podrá hacer nunca bien, como no lo ha hecho hasta ahora ningun Congreso de la tierra; porqué no ha de hacer, repito, respecto á lo difícil, lo que hace respecto á lo fácil?

El temperamento que propone el señor diputado por Tucuman, doctor Gallo, me parece aceptable; el que propongo yo, tambien.

Pero si se quiere entrar mas en el estudio de esto, nos vamos á encontrar con graves inconvenientes.

Uno de los señores diputados que ha sido miembro de las cámaras, recordaba las dificultades en que se encuentra la de lo Civil para atender á ciertas exigencias de la ley; por ejemplo, para expedir los diplomas de maestros mayores, contadores, etcétera. La misma ley de organizacion de los tribunales dá facultad á las cámaras de lo civil para tomar exámenes y expedir diplomas de abogados, y está en frente la Facultad de Derecho, con mas derecho á ejercer esas funciones que la Cámara, á la cual se saca de su caracter al hacerla tomar exámenes y expedir diplomas profesionales y científicos.

Si queremos ir tan minuciosamente en esto, vamos á llegar á dictar el verdadero estatuto en todos sus detalles, que es lo que se ha querido evitar al dar estas bases generales.

Podia hacer la Cámara lo que se hace desde que hay Constitucion. No ha dictado planes de estudios; y sin embargo, hay planes de estudios; y los diplomas que tienen muchos de los que están en la Cámara, inclusive el que habla, son obtenidos de facultades que han procedido, diremos, contra la Cons-

titucion, dictando planes de estudios sin tener derecho á dictarlos.

Sr. Gallo (D.)—No es contra la Constitucion....

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Con prescindencia, con desconocimiento, no tomando en cuenta...

Sr. Dávila—En ausencia de la ley del Congreso.

Sr. Ministro de Justicia, Culto é Instruccion Pública—Estamos, pues, en esta situacion: la pereza, la desidia, la falta de iniciativa, sirven de disculpa en un caso;—sirva en otro el silencio.

La Cámara sabe que el Congreso Argentino no dictará jamás un plan de estudios, como no lo dictará ningun Congreso de la tierra.

Es una tarea que le ha impuesto la Constitucion (y yo me creo en el deber de no criticarla) que no llenará jamás ningun congreso político.

Entonces, si tenemos la conviccion de que esto no ha de suceder, ¿porqué no pasamos por encima de la dificultad, sin mirarla? No mirándola podríamos dictar la ley en la forma que fuere necesaria.

Sr. Calvo—El sistema del señor Ministro me recuerda lo que hacen los avestruces cuando los persiguen: meten la cabeza debajo del ala, creyendo salvar así el peligro. (Risas) Pero el Congreso Argentino no puede hacer eso. No podemos pasar por encima de la Constitucion!

Sr. Presidente—Habia pedido la palabra el señor diputado por Entre-Rios.

Sr. Crespo—Iba á decir que creia que las ideas manifestadas por el señor diputado por Tucuman, son muy exactas; pero creo que el Congreso no ha delegado esa facultad, ni la delega, ni la vá á delegar en lo sucesivo, aun cuando no se diga esplicitamente quien vá á dictar los planes de estudios.

La práctica es esta: cada facultad señala su plan de estudios, distribuye las materias que deben ser enseñadas y establece la época en que debe hacerse la enseñanza.

Estos planes de estudios se remiten al Ministerio de Instruccion Pública, y este los remite al Congreso bajo la forma de ley del presupuesto y no es la primera vez que el Congreso suprime ó crea nuevas cátedras durante su discusion.

Este es el ejercicio de esa facultad de que se habla—á mi modo de ver—que desempeña indirectamente el Congreso.

No hay, pues, tal delegacion aun cuando las facultades formulen los planes de estudios, porque el Congreso se reserva el derecho de revisarlos, autorizando ó negándose á la creacion de nuevas cátedras.

Entonces creo que el artículo tal cual lo presenta la Comisión debe sostenerse.

Sr. Gallo (D.).—Yo lo sostengo como lo presenta la Comisión; lo que no acepto, es la modificación.

Sr. Crespo.—Por eso digo que me encuentro de acuerdo con el señor diputado por Tucumán.

Creo que lo único que podría indicarse, y aun esto mismo es reglamentario, es la expedición de diplomas en las facultades. Pero, por lo que hace á los planes de enseñanza pienso que cada facultad debe formularlos teniendo siempre el Congreso el derecho de suprimir ó agregar las cátedras que crea convenientes, al discutir el presupuesto.

Sr. Navarro Viola.—Preguntaría al señor diputado: ¿en qué punto de esta ley, una vez sancionada, estaría la autorización para que las facultades procedan así?

Este es todo mi argumento.

Se ocupa de todo menos de lo principal, que es dictar los planes de estudios. ¿Quién las dicta?

Sr. Crespo.—Las facultades.

Sr. Navarro Viola.—Es preciso decirlo en una ley que tiene por objeto decir lo que pueden hacer las facultades.

Sr. Crespo.—Pero es que esa facultad es condicional, puesto que después vá á venir á ser autorizada por el Congreso.

Sr. Navarro Viola.—Eso no es un argumento, porque destituiría toda categoría de leyes, desde que todas vienen á tener esa segunda revisión á que se refiere el señor diputado, y sobre la cual no es el momento de discutir. Yo no sé si el Congreso puede legislar con la ley del presupuesto.

Sr. Tagle.—Como se han manifestado distintas opiniones, sería preciso pasar á un cuarto intermedio para ver de coordinarlas; pero la hora es algo avanzada, y por eso hago moción para que se levante la sesión.

— Apoyada.

Sr. Presidente.—Se votará, y para el caso que resultare afirmati, advierto que la órden del día queda constituida con los asuntos comprendidos en los órdenes del día cuatro y cinco.

— Votada la moción de levantar la sesión, es aprobada, procediéndose en consecuencia.

— Son las 5 1/2.